



“Dar mando militar a Guardia ignora a víctimas”

Amnistía Internacional llama al Senado a votar contra “la militarización de la seguridad pública”

MARÍA CABADAS

—nacion@eluniversal.com.mx

Con la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ignoró el sufrimiento de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, aseguró Amnistía Internacional (AI).

El organismo internacional expresó su preocupación al señalar que, a pocos días del aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y de la masacre de Tlatelolco, en 1968, se dé avance a la reforma que adscribe a la Guardia Nacional a la Defensa Nacional.

“Se está ignorando el sufrimiento de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas”, señaló en su cuenta de X.

Y llamó al Senado a votar contra la militarización, bajo el argumento de que esa reforma constitucional significaría la culminación del proceso de militarización de la seguridad pública y un grave retroceso en materia de derechos humanos.



AMNISTÍA INTERNACIONAL

“La actual crisis social y de derechos humanos que enfrenta el país ha sido agravada por la creciente militarización y (...) requiere la urgente intervención estatal”

En su más reciente reporte *México: Guardia Nacional*, AI destaca que lejos de que el gobierno mexicano implemente un programa de retiro progresivo de las fuerzas militares —que incluya plazos claros para que los agentes abandonen tareas de seguridad pública—, se aprobó esa reforma que significaría

la culminación de un proceso que ha venido dándose: la militarización del país y un grave retroceso en cuanto a derechos humanos.

Señala que en la exposición de motivos de la referida reforma se reconoce que la estrategia de seguridad conocida como “guerra contra el narcotráfico”, implementada en 2006 a través del despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, fue fallida pues no logró reducir la violencia criminal sino que, por el contrario, la exacerbó, provocando la descomposición institucional y la crisis social y de derechos humanos más grave que ha atravesado el país.

“La actual crisis social y de derechos humanos que enfrenta el país ha sido agravada por la creciente militarización y (...) requiere la urgente intervención estatal. Sin embargo, la actual estrategia utilizada por el gobierno mexicano de emplear a personal militar en labores de seguridad ciudadana no es la solución”. ●